



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

HONORABLE ASAMBLEA:

En sesión pública ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2005 los Diputados integrantes del Partido Acción Nacional promovieron ante esta Soberanía Popular **Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 58 fracción XXXIII y 91 fracción X de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas** misma que el Presidente de la Mesa Directiva, en ejercicio de sus atribuciones de dirección parlamentaria, después de ser admitida a trámite legislativo en términos de los dispuesto por el artículo 165 de la propia ley fundamental de Tamaulipas, determinó turnarla a esta Comisión de Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

En virtud de lo anterior, quienes integramos la Comisión Ordinaria de referencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, párrafo 1, 36 inciso a), 45 párrafo 1 y 2; 46 párrafo 1; 95, párrafos 1, 2, 3, y 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, procedimos a su análisis y valoración, presentando al efecto nuestra opinión a través del siguiente:



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DICTAMEN

Con el objeto de llevar un orden metodológico que permita apreciar con mayor claridad los argumentos en que sustentamos el criterio adoptado para emitir el presente veredicto, quienes dictaminamos, tenemos a bien verter nuestra opinión a través de cuatro apartados relativos a la competencia y proceso de revisión de la Constitución; objeto y contenido de la iniciativa; análisis de la acción legislativa en estudio y consideraciones de la dictaminadora, en los términos siguientes:

I. Competencia y proceso de revisión de la Constitución.

Como es del conocimiento de este cuerpo colegiado, el artículo 165 de la Constitución Política del Estado establece la posibilidad de introducir reformas y adiciones, mediante un procedimiento específico que se desprende del propio precepto antes citado. Al efecto, se requiere que con anticipación a que el Poder Legislativo delibere y vote sobre la iniciativa propuesta, por el voto de la mayoría de los Diputados presentes en la sesión en que haya sido recibida ésta, se otorgue una votación favorable para que sea tomada en cuenta dentro de la actuación del propio Congreso del Estado como órgano revisor de la Constitución.

En este tenor, es de señalarse que la iniciativa que nos ocupa ha cumplido con las previsiones procedimentales que establece la propia Constitución, al ser aprobada por



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

esta Asamblea la procedencia de su análisis en términos del artículo 165 de la ley fundamental de Tamaulipas.

Es así que en esta tesitura se sustenta la competencia de este órgano congresional, y particularmente el análisis de las comisiones que dictaminamos, dentro del marco de revisión constitucional que incumbe a este Poder Legislativo.

II. Objeto y contenido de la iniciativa.

En términos generales, la iniciativa que nos ocupa propone reformar los artículos 58, fracción XXXIII y 91 fracción X de la Constitución Política local, en materia del procedimiento para la ratificación del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Al efecto, en su exposición de motivos, el promovente refiere que el Ministerio Público es la fiscalía u órgano acusador del Estado, como representante de la sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal. Y que suele ser considerado como la parte acusadora, de carácter público, encargada, de exigir la actuación de la pretensión punitiva y de su resarcimiento, en el proceso penal. Como representante de la sociedad, el ministerio público no persigue ningún interés propio, ni ajeno, sino que realiza llanamente la voluntad de la ley.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

Asimismo, en los argumentos expuestos, el promovente pone de relieve que como parte publica dentro del proceso, el ministerio público es indispensable para que exista proceso penal, agregando a sus peculiaridades un carácter forzoso, imparcial, de buena fe y privilegiado. Es un órgano jerárquico o único, con poder de mando, radicado en el procurador, por lo que los agentes constituyen solamente una prolongación del titular. Es considerado indivisible, puesto que los funcionarios actúan exclusivamente a nombre de la Institución.

De igual forma el promovente manifiesta que el Ministerio Público es una institución dependiente del estado, el cual actúa en representación de la sociedad en el ejercicio de la acción penal y la tutela social en todos aquellos casos que le asignan las leyes, es un órgano sin género, de naturaleza muy singular, ya que adopta un sin número de fases en su funcionar.

Exponiendo los promoventes que, la división de poderes, no es una división mecánica y estática sino una división orgánica y funcional; es decir aun cuando los poderes se dividen para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial es claro que los poderes tienen que colaborar y relacionarse entre ellos para el bien común, que es el fin supremo del Estado. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están investidos de mando, el primero lo hace a través de la ley, el segundo por medio de la fuerza material. Es por lo anterior que en estos poderes recae con mayor fuerza la responsabilidad de garantizar a la ciudadanía su bienestar y seguridad social pues a



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

través de la norma jurídica y su ejecución se regulan las instituciones encargadas de satisfacer las necesidades de la sociedad.

Con base en estas premisas el promovente sustenta el objeto de su iniciativa, que consiste, precisamente, en que través de estos matices parlamentarios, el ejecutivo tiene que respetar la decisión del poder legislativo para poder actuar en consecuencia, tal es el caso de la suspensión de garantías, el refrendo, la glosa del informe de la administración pública, la designación de ejecutivo provisional o sustituto cuando hay ausencia de él.

Y que el Gobernador como representante del Poder Ejecutivo tiene la facultad de designar la persona encargada de la Procuración de Justicia en el Estado, empero, corresponde al Poder Legislativo evaluar y determinar su capacidad para tal responsabilidad por medio de su ratificación.

Exponiendo además en la acción legislativa propuesta que es a esta soberanía popular que le corresponde al pueblo representado en este poder legislativo, el determinar si el encargado de procurar justicia en el estado cumple de manera idónea con su encomienda; pues el Procurador General de Justicia del Estado y los Ministerios Públicos son representantes sociales, por ende, sus representados (el pueblo) tiene el derecho de determinar si su actuación es la correcta o tomar la



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

decisión de asignar el cargo a otra persona que pueda cumplir con la tarea de procurar justicia.

III. Análisis de la acción legislativa en estudio.

A la luz del objeto de la iniciativa que nos ocupa y en aras de conocer a plenitud sus alcances, es menester analizar primeramente la institución sobre la cual versa la modificación constitucional pretendida, a fin de robustecer nuestro criterio para emitir nuestra opinión definitiva.

Así, procedimos al análisis de la institución del Ministerio Público, partiendo del estudio efectuado en la exposición de motivos del promovente, en donde se establece una semblanza concisa sobre la designación del Procurador General y su ratificación, en donde destaca la situación que guarda el particular pues implica la designación por parte del Ejecutivo y la ratificación del Poder Legislativo para perfeccionar el nombramiento, siendo esta ratificación anual a partir de su nombramiento.

De aquí se desprende que con la presente acción legislativa pretendida, Tamaulipas pasaría a formar parte de los Estados que se encuentran a la vanguardia al supeditar a la potestad del Poder Legislativo la designación del titular del Ministerio Público, mediante la ratificación correspondiente.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

Ahora bien, con la finalidad de enriquecer nuestra visión analítica sobre la reforma constitucional que nos ocupa, enfocamos nuestro estudio en forma retrospectiva al análisis de la figura jurídica en comento a lo largo de la historia; así, encontramos que la legislación española que se aplicó durante la época colonial denominó a la institución del Ministerio Público como la instancia de promoción y procuración fiscal al servicio de la corona.

Esta orientación predominó en los primeros ordenamientos constitucionales de nuestro país, situando a los promotores o procuradores fiscales como integrantes de los organismos judiciales, todavía sin establecer un verdadero organismo unitario y jerárquico.

En la Constitución de 1857, se dispuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuviera integrada por once ministros propietarios, cuatro suplentes, un fiscal y un procurador general.

Fue en el año de 1900, mediante una reforma a la Constitución de 1857, cuando se estableció que el Procurador General debe ser nombrado por el Ejecutivo, fincando así la base constitucional de su designación y su ubicación dentro del Poder Público a nivel nacional y estatal.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

De esta manera podemos observar que esta institución se originó como una instancia al servicio de la corona en la época colonial, para después ubicarse en el ámbito judicial una vez constituida la república, y finalmente, acorde a su naturaleza, se situó como un órgano administrativo del Ejecutivo.

Es así que por su naturaleza, la procuración de justicia, desde principios del siglo pasado, constituye, como acertadamente lo expone el promovente, una tarea indeclinable de la responsabilidad de la rama ejecutiva de gobierno encargada de realizar la persecución de los ilícitos penales y las actividades de investigación inherentes.

Sin demérito de lo anterior y a la luz del principio de la división de poderes, el Congreso del Estado con pleno respeto al equilibrio que debe imperar en el poder público para su buen ejercicio, no está facultado constitucionalmente para otorgar nombramientos o hacer designaciones respecto a órganos del Poder Ejecutivo o Judicial del Estado, con excepción de los casos expresos en la Constitución Política local, así como en el caso de las facultades expresas de actuación en torno al perfeccionamiento de ciertos nombramientos mediante su ratificación, como una forma de validación por parte de la sociedad.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

Así, en el caso concreto, la sociedad, por conducto de la Legislatura, tendrá en todo momento el derecho de determinar si es procedente o no la designación del Procurador General de Justicia del Estado que realice el Ejecutivo Estatal.

Por lo anterior consideramos que si al titular del Poder Ejecutivo, le corresponde en su esfera de competencia, por disposición constitucional, la responsabilidad de las actividades propias del Ministerio Público, debe ser éste quien dilucide y determine en última instancia sobre el nombramiento del titular de la precitada institución a falta de acuerdo por parte del Congreso, ello a la luz de la representación social que también reviste la investidura del propio titular del Poder Ejecutivo, y atendiendo además al respeto que debe existir en el ejercicio e interacción de las franjas que conforman el Poder Público.

Por ello es de colegir que la situación actual de nuestra Constitución local es una interacción corresponsable entre el Ejecutivo y el Legislativo, para la designación del titular del Ministerio Público, a fin de que la sociedad, por conducto de su representatividad en el Congreso, concorra en la determinación de este propósito, circunstancia que consideramos como un avance de nuestro Estado y el fortalecimiento de sus instituciones.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

IV. Consideraciones de la dictaminadora.

Ahora bien en base a la anterior certeza jurídica y antecedentes, esta comisión dictaminadora se avoco a la revisión de la referida acción legislativa pretendida, a efecto de conocer el estado que guardaba y, en su caso, proceder a la elaboración del proyecto de dictamen para estar en condición de obtener la opinión correspondiente.

Es así que una vez revisada la iniciativa de mérito objeto de estudio, nos encontramos con que por diversas circunstancias, en específico la característica de su situación actual, el trámite legislativo resulta extemporáneo o improcedente.

Siendo esta situación anteriormente descrita, que se encuentra la acción legislativa tendiente a expedir Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 58 fracción XXXIII y 91 fracción X de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

Y es que el pasado 1 de febrero del 2005 el Titular del Ejecutivo Estatal envió a esta soberanía popular Iniciativa de Decreto que reformaba los artículos y fracciones antes citadas de la Constitución Política local.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

Misma que fuera aprobada por el Pleno Legislativo el pasado 9 de febrero del 2005, expidiéndose al efecto el Decreto número LIX-5 de misma fecha, y publicándose al efecto en el Periódico Oficial del Estado número 18, Tomo CXXX el 10 de febrero de ese mismo año.

De tal modo que dichas reformas comprendieron la intención del Ejecutivo del Estado, de obtener la aprobación del Congreso del Estado, una reforma para la designación y aprobación en su caso, por parte del Congreso local, en su ratificación para el nombramiento del procurador de Justicia del Estado.

Ahora bien esta comisión dictaminadora esta convencida que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar a la sociedad, leyes eficientes y actuales a sus necesidades tutelando el cumplimiento de las normas y procedimientos jurídicos vigentes.

En ese sentido es que analizando la presente acción legislativa es que en nuestra Constitución local, como bien se expresa líneas arriba, es el Titular del Ejecutivo quien nombrará al procurador de Justicia del Estado sometiéndolo a la aprobación de este Poder Legislativo.

En ese tenor, para reforzar el presente razonamiento jurídico esta comisión dictaminadora considera prudente invocar lo estipulado por el artículo 89 fracción IX



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

de nuestra Carta Magna en el que expresa sobre las facultades y obligaciones del Ejecutivo Federal es el de designar con ratificación del Senado al Procurador General de la República.

Por otro lado quienes dictaminamos, una vez analizado nuestras leyes locales consideramos que no tiene sustento jurídico el reformar la Constitución local en el sentido de ratificar anualmente al Titular del Ministerio Público en virtud que la ley interna que nos rige en su artículo 47 da facultades a las Comisiones que conforman este Poder Legislativo de solicitar la presencia de servidores públicos de los entes públicos del Estado para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos a su cargo.

Siendo el presente caso aplicado también para el Procurador General de Justicia del Estado.

Sin demérito del análisis de la naturaleza y alcances de la propuesta los que suscribimos el presente dictamen creemos que la acción legislativa intentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha quedado sin materia por lo anteriormente expuesto.

Por lo cual estimamos que el objeto de la actuación que nos fue encomendada carece actualmente de materia. Lo anterior es así porque establecer en un dictamen el punto de vista en torno a esta propuesta no tiene ningún efecto jurídico, cualquiera que fuera



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

la determinación que se adoptara al respecto, por lo tanto quienes integramos esta dictaminadora consideramos el presente instrumento jurídico objeto de estudio como asunto concluido y se ordene el archivo del expediente relativo, dejando a salvo los derechos y las acciones legislativas de los promoventes para que, en su caso, promuevan las iniciativas de Decreto correspondientes.

En virtud de lo antes expuesto, y con fundamento en lo previsto por el artículo 93 párrafo 3 inciso c) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, nos permitimos proponer a este Honorable Cuerpo Colegiado la aprobación del siguiente:



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO

ARTICULO UNICO.- Se declara sin materia la Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 58 fracción XXXIII y 91 fracción X de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, promovida por los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y se archiva el expediente como asunto concluido.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición.



**GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO**

Dado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil siete.

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

**DIP. JOSÉ GUDIÑO CARDIEL
PRESIDENTE**

**DIP. CARLOS M. MONTIEL SAEB
SECRETARIO**

**DIP. ALEJANDRO CENICEROS MARTINEZ
VOCAL**

**DIP. ALEJANDRO A. SAENZ GARZA
VOCAL**

**DIP. ABDON CANALES DIAZ
VOCAL**

**DIP. JESUS E. VILLARREAL SALINAS
VOCAL**

**DIP. ALEJANDRO F. MARTINEZ RODRIGUEZ
VOCAL.**